

Crónica del mes

Marzo

Tal parece que lo social se perfila como lo predominante en la agenda nacional de inicios de 2005. Al menos eso se concluye a partir de una revisión de la cobertura de los medios informativos locales hacia cuestiones de interés público. La violencia social, la educación, la salud, la escasez de agua en las comunidades, la pobreza y marginalidad en los municipios más remotos de El Salvador y la corrupción, entre otros, han sido los asuntos más recurrentes entre los periodistas. En contraste, la prensa no ha brindado la misma atención a la actividad de los partidos políticos ni a la política en general, como lo hiciera meses atrás, pese a que el próximo año se celebrarán elecciones municipales y los institutos políticos en contienda afinan sus respectivas estrategias para hacerse del poder. En lo que a la economía respecta, aparte de algunas modificaciones a las reformas tributarias impulsadas por el Ejecutivo y a los incrementos sostenidos en los combustibles, no ha habido mayores sobresaltos.

¿Se estaría operando un tránsito de lo político y lo económico hacia lo social en la agenda del país? Si se apela al discurso gubernamental podría confirmarse que, efectivamente, lo político ha dejado de ser —al menos momentáneamente— la nota de primera plana en los medios. El eslogan que calza la propaganda gubernamental —“lo social no es complemento de nada, lo social es la base de todo”—, sería una muestra inequívoca de lo anterior. No obstante, todo plan gubernamental conserva su tinte político.

Y desde la población, ¿cómo se siente lo social? Un sondeo de *La Prensa Gráfica* realizado durante el mes de marzo mostró que los problemas económicos (falta de empleo, pobreza e inflación) y los problemas de seguridad pública (delincuencia y violencia social) son los más sentidos por los salvadoreños. A estos les preocupa más conseguir un

empleo y no ser víctima de la delincuencia que los sobresaltos de los políticos y la política. Lo social parece ser, pues, lo más urgente tanto para la población como para el Ejecutivo.

El desempeño del Estado salvadoreño —especialmente el Ejecutivo— ha sido también evaluado por la población, pero nuevamente su interés se centra en lo social. Pero no solo los salvadoreños han realizado un ejercicio de evaluación. La primera potencia mundial hizo lo suyo. El día 28 de febrero, la subsecretaría de Estado para asuntos globales de Estados Unidos presentó su informe anual sobre la situación de derechos humanos en diferentes países del mundo. Respecto de El Salvador, el referido informe lanza duras críticas al sistema judicial y hace un llamado de atención sobre la temática laboral. “La impunidad de los ricos y poderosos continúa siendo un problema, así como la violencia y la discriminación contra la mujer. Los abusos contra la infancia, el trabajo infantil, la prostitución infantil forzada y el tráfico de mujeres y menores aún son problemas”, sostuvo el informe.

Pero no todos, incluso dentro de los Estados Unidos, se mostraron de acuerdo con el documento. La Oficina de Washington para América Latina (WOLA, por sus siglas en inglés) denunció, por ejemplo, la existencia de “flagrantes disparidades” del tratamiento de los países en el informe, situación que se explicaría a partir de “las prioridades políticas” de Washington, según el organismo no gubernamental. La prensa nacional reseñó la presentación del documento.

Al día siguiente, 1 de abril, la Fiscalía General de la República (FGR) y el Ministerio de Gobernación aceptaron las críticas vertidas por el departamento de Estado. El fiscal general, Belisario Artiga, por ejemplo, aceptó las deficiencias en la investiga-

ción de los delitos, mal que padece la institución que preside. Por su parte, el magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Ulises del Dios Guzmán —único funcionario de justicia que aceptó comentar el informe—, declaró que las “fallas y defectos del sistema de justicia no dependen sólo de los jueces, sino de policías y fiscales”. Finalmente, la procuradora de Derechos Humanos, Beatrice de Carrillo, comentó que ella había denunciado, durante cuatro años, las violaciones que señala el departamento de Estado norteamericano.

En lo tocante a la actividad del Ejecutivo destacó la presentación del plan gubernamental “Oportunidades”. Desde el último día de febrero, el presidente Elías Antonio Saca había anunciado el lanzamiento del plan que busca, desde diferentes áreas, atender a las 100 familias más pobres del país, en los cuatro años que restan de su administración presidencial. El plan contempla cinco programas —FOSALUD, Red solidaria, “Jóvenes”, microcréditos y “Conéctate”— y atenderá a 20 mil familias por año. Una semana después, el 6 de marzo, la coordinadora del área social de la administración Saca, Cecilia Gallardo de Cano, declaró a la prensa que el plan “no es un programa, sino una política social de atención a la pobreza, porque son todas las instituciones que dan servicios básicos las que lo ejecutan”.

El anuncio oficial se hizo el día 7. El plan se empezará a ejecutar en quince municipios y atenderá a 20 mil familias, identificadas como imposibilitadas para adquirir la canasta básica. El próximo año se incorporarán otros dieciséis municipios con otras 20 mil familias. Luego, la cobertura se ampliará a 68 municipios. El plan se propone concentrar recursos y servicios de diversas instituciones públicas, en las zonas más pobres del país. Comprende asistencia económica directa a cambio de enviar a los menores a la escuela y colocarlos bajo control en el centro de salud de la localidad, apoyo a pequeños agricultores con microcrédito durante tres años, y establecimiento de escuelas y centros de salud con servicios básicos —infraestructura, electricidad, agua potable y saneamiento— o mejora de los existentes. A esto se agrega mejora de viviendas y caminos rurales.

Las escuelas y los centros de salud, además, deben estar equipados para atender la afluencia de los menores y sus madres. De esta forma, el gobierno se propuso incidir directamente en la educación y la salud de la población infantil y en la de las

madres, al mismo tiempo que les proporciona crédito para generar ingresos suficientes como para adquirir la canasta básica. El desarrollo del plan, según sus gestores, será seguido de cerca por el gobierno, a través de un censo y registro de los indicadores básicos. La presentación de plan despertó mucha expectativa entre diferentes sectores nacionales. Como era de esperarse, la postura más escéptica provino de la dirigencia del FMLN.

Por otra parte, como se señaló arriba, los problemas relacionados con la seguridad pública fueron de los que más generaron discusión durante marzo. Ya desde el día 2, la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) expresó su preocupación por la creciente ola de asesinatos registrados en el país desde inicios del año. “Nos sumamos al esfuerzo que hace el presidente de la República por el combate de la delincuencia”, dijo el director de la gremial empresarial, Antonio Cabrales, en el marco de un foro organizado para discutir la temática. En relación al combate del crimen organizado, el 4, la prensa reseñó cómo el Departamento de Estado de los Estados Unidos dio un espaldarazo a la labor de la Policía Nacional Civil (PNC) en el combate del narcotráfico. “Numerosos desarrollos significativos durante el año demostraron que el gobierno de El Salvador está comprometido en cumplir los objetivos de la Convención Antidrogas de las Naciones Unidas de 1998”, rezaba parte de un documento titulado *Reporte de estrategia internacional para el control de narcóticos*, en el que se elogia al gobierno salvadoreño.

El 5, el presidente Saca anunció su posición en torno al debate sobre la portación de armas entre la población civil. Saca declaró no estar de acuerdo con el desarme de la sociedad: “Yo creo que no debemos quitarles las armas a las personas honestas... ¿por qué razón se las vamos a quitar frente al deshonesto, el pícaro, al sinvergüenza que circula por las calles con armas ilegales”, razonó el mandatario.

El 14, la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas inglesas) informó sobre la detención de 103 miembros de la pandilla MS —62 de ellos salvadoreños— en siete ciudades de la unión americana, entre las que destacan Nueva York, Washington y Los Ángeles. “Nuestro objetivo es simple: desmantelar a la MS-13, sacando a los pandilleros de nuestras calles y de nuestras comunidades”, dijo a la prensa el director del ICE, Michael García. Ese mis-

mo día, el director de la Policía Nacional Civil, Ricardo Meneses, restó importancia a la inminente deportación de pandilleros salvadoreños hacia el país: “han venido un montón de pandilleros deportados en los últimos años, cantidades grandes. Podemos hacerles frente a los problemas generados por estos pandilleros que sean expulsados, ya sea en la parte operativa o en la parte de rehabilitación”, acotó el funcionario.

No obstante, el 15, el presidente Saca y el subdirector de operaciones de la PNC, Douglas García, discreparon del director policial, mostrando su preocupación. “Tendremos que evaluar la situación para saber qué vamos a hacer con esta gente [...] Estados Unidos va a comenzar a deportar gente peligrosísima que hay que vigilar”, comentó el mandatario. Por su parte, García expresó que “viene gente especializada en homicidios, crimen organizado, en control de territorios, venta de drogas, tráfico de armas, porque es otro nivel en el que se manejan las pandillas en Estados Unidos”. La prensa abordó paralelamente a varios funcionarios de justicia y del Ejecutivo que manifestaron la misma preocupación.

Ese mismo día, el presidente Saca mostraba su negativa a derogar la Ley de Amnistía emitida en 1993, que eximiera de delito a los militares y guerrilleros que cometieron violaciones contra los derechos humanos de salvadoreños durante la guerra. “Los salvadoreños me han elegido para administrar el futuro y de ninguna manera estoy dispuesto a poner un granito de arena para quitar la ley de amnistía que ha permitido darle tranquilidad y estabilidad al país”, aseguró el jefe del Ejecutivo. Saca se pronunció también en contra de las mociones del Instituto de Tutela Legal del Arzobispado, que gestiona la apertura del caso de la masacre del Mozote, en Morazán, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (CIDH).

El 17, los presidentes de El Salvador y Guatemala, Antonio Saca y Óscar Berger, respectivamente, hicieron oficial el lanzamiento de un plan policial binacional orientado a labores de prevención y diversos delitos que afectan a las zonas limítrofes de ambas naciones. En el marco del encuentro, la Policía Internacional (INTERPOL) se comprometió a “amparar el accionar recíproco de ambos cuerpos de seguridad”.

El 27, concluido el periodo vacacional, el Comité de Emergencia Nacional (COEN) publicó su

balance de las emergencias atendidas durante ese periodo. El saldo de la violencia ubicó nuevamente a El Salvador al tope de las estadísticas regionales, con 166 fallecidos, la mayoría por arma de fuego. En el otro extremo se hallaba Panamá, con únicamente 13 decesos.

El COEN contabilizó 2 168 emergencias. En líneas generales, hubo una reducción en el número de casos atendidos respecto al mismo periodo del año pasado. No obstante, a pesar de reducirse las cifras en el número de personas lesionadas y de accidentes, las cifras de muertes violentas presentaron un incremento considerable. La principal razón de fallecimientos fue el uso de armas de fuego (64 casos), seguido por los accidentes de tránsito. En un tercer y cuarto lugar se ubican las muertes por uso de arma blanca y asfixia por sumersión, respectivamente.

En los casos de personas lesionadas, los motivos más recurrentes fueron por ataques por arma blanca (322), politraumatismos (192), fracturas (117) y ataques por arma de fuego (41). Es interesante notar cómo el segundo y tercer motivo de importancia —politraumatismos y fracturas— estarían directamente relacionados a los accidentes de tránsito. De hecho, un vistazo a los datos proporcionados por el COEN confirma que los 433 accidentes que se registraron son exclusivamente terrestres.

En otra categoría, durante la semana de vacaciones se llevaron a cabo 453 rescates acuáticos (mares, lagos, piscinas), cinco en zonas urbanas y sólo uno en las montañas. Esto indica que el trabajo del COEN fue más exigido en la zona costera y diferentes turicentros del interior del país. Hubo 61 incendios. Más de la mitad de ellos se dieron en lugares donde existe maleza (31), 12 fueron de tipo estructural (viviendas, edificios, fábricas, etc.) y 11 forestales.

A la par del problema de la violencia —hay que insistir— se sucedían otros problemas sociales como los relacionados a la educación. Para el caso, desde el 14 de marzo, docentes de todas las facultades de la Universidad de El Salvador (UES), en la sede central de San Salvador, se declararon en paro laboral para presionar por un incremento de 400 dólares mensuales en sus salarios. Según los impulsores de la medida, contaban con el respaldo de un 70 por ciento de los docentes de ese recinto. Más adelante se les unieron los empleados administrativos de la institución.

Sin embargo, la rectora de la universidad, María Isabel Rodríguez, negó la posibilidad de un incremento salarial: "el incremento es absolutamente imposible en estas condiciones. La universidad no puede dar una respuesta positiva", aseguró la funcionaria. Mientras tanto, la población estudiantil se veía afectada por la medida docente que se mantuvo indefinida hasta el cierre del mes de marzo.

Solo resta decir unas palabras sobre dos estudios de opinión pública que se conocieron durante el mes de marzo. El primero de ellos —elaborado por *La Prensa Gráfica*— fue presentado el día 3. En el mismo se concluye que las principales preocupaciones de los salvadoreños tienen que ver con los problemas económicos (el 50.4 por ciento de los entrevistados) y la seguridad pública (el 37.2 por ciento).

Días después, el 8, el Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA (IUDOP) presentó los resultados de un estudio que revela la percepción de los empresarios sobre la corrupción y discrecionalidad en las estructuras estatales. El informe titulado *La transparencia en el Estado salvadoreño, la percepción de los empresarios* concluye que más del 50 por ciento de los empresarios entrevistados se quejó de la corrupción en las oficinas de gobierno. El estudio fue financiado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (AID). Al día siguiente, el presidente Saca comentó los resultados del informe. "Si existe desconfianza, debemos dar el siguiente paso, que es denunciar", exhortó el mandatario.

En lo concerniente a la economía lo más importante tuvo que ver con algunos escollos del comercio internacional. Por ejemplo, los precios del petróleo siguieron al alza, impactando los precios locales de los combustibles. Por otro lado, las exportaciones del país hacia Europa en condiciones preferenciales se vieron amenazadas luego que los europeos condicionaran ciertos beneficios comerciales a la suscripción de tratados laborales. La disposición fue comunicada al gobierno salvadoreño el mes pasado y mantuvo en vilo a las autoridades económicas locales.

Sin embargo, el día 9, el Parlamento Europeo aprobó una reforma al SGP Plus (Sistema Generalizado de Preferencias) para que El Salvador fuera uno de los países beneficiados del esquema comercial, pese a no haber ratificado dos convenios laborales que los europeos habían fijado como re-

quisito para extender el beneficio. "Es una buena noticia, un respaldo enorme [...] es lo que necesitamos", comentó la ministra de Economía salvadoreña, Yolanda de Gavidia. La ratificación, el aval parlamentario, quedaba en manos de la Comisión y el Consejo Europeo.

El 16, el presidente Saca anunció la designación de una comisión de diálogo nacional instalada para consultar con diversos sectores temas como la libertad sindical, la negociación colectiva y el régimen de aprendizaje, convenios pendientes de ratificar por El Salvador ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT). "Se trata de una reforma integral para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos en el marco del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos", precisó Saca.

El mes de marzo cerraba con la Semana Santa y con las celebraciones del XXV Aniversario del martirio de monseñor Óscar Arnulfo Romero, que continuarían hasta el mes de abril. A los primeros actos asistieron cientos de salvadoreños y extranjeros. Con todo, las celebraciones revivieron la discusión a propósito de la vida y obra del arzobispo asesinado un 24 de marzo de 1980. Vale la pena recoger algo de ello. Mucho se ha dicho, pero no se ha preguntado a Monseñor. ¿Qué diría Óscar Romero ante la situación actual? Obviamente, no se quedaría de brazos cruzados y utilizaría los canales adecuados —que hoy son más que hace 25 años— para transmitir su mensaje y, con él, el de los más desfavorecidos de la sociedad.

Llamado a Lovaina, Bélgica, para recibir un doctorado *honoris causa* por la Universidad de esta ciudad, a 50 días antes de su asesinato, monseñor Romero declaraba: "el mundo al que debe servir la Iglesia es para nosotros el mundo de los pobres"; y más adelante, "los pobres son los que nos dicen qué es el mundo y cuál es el servicio eclesial al mundo. Los pobres son los que nos dicen qué es la 'polis', la ciudad y qué significa para la Iglesia vivir realmente en el mundo".

Su opción por los pobres y más desfavorecidos es clara, no hay duda. Su posición ante las estructuras políticas, sociales y económicas también es diáfana: si no responden al mundo de los pobres —que aún son una gran mayoría en El Salvador— deben ser cambiadas.

Precisamente la centralización de la actividad de los sectores nacionales en los pobres vincula un asunto que ha sido tratado desde el inicio de estas

líneas y el cual vale la pena poner en perspectiva. Ya era hora de emprender una acción sistemática para reducir la extrema pobreza del país. El plan "Oportunidades" no es todo lo que habría que hacer, pero es un buen comienzo y un esfuerzo que amerita apoyo, en la medida en que sea serio y beneficie a las familias más desprotegidas. La mejora de los servicios básicos debiera extenderse pronto a las concentraciones de pobladores. El microcrédito no será suficiente, si no va acompañado de un buen plan de asistencia técnica. Queda, pues, mucho por hacer, pero es un buen comienzo. No hay que perder de vista que esta intervención masiva del gobierno en la sociedad es un reconocimiento del fracaso del mercado como principio regulador de la vida nacional.

No es, pues, válido rechazar el plan por la desconfianza que siempre despiertan esta clase de intervenciones gubernamentales. Hay razones de sobra para desconfiar; pero no es sano adoptar una postura intransigente sin antes poner a prueba las verdaderas intenciones del gobierno. Es cierto que el plan no cubre a toda la población pobre, ni tal vez a toda la que vive en extrema pobreza, pero no se puede desconocer que comienza con un buen número de familias. En parte, esto se debe a la falta de recursos financieros; pero no es mala idea concentrar los pocos recursos disponibles en aquellos sectores más necesitados y abandonados. Por otro lado, es práctico comenzar con un sector razonable antes de lanzar el plan a escala nacional. Es una experiencia nueva y, por lo tanto, la prudencia aconseja avanzar de forma gradual.

La encargada de lo social en el gobierno de Saca habla de una política social y se escuda en la acción de varias dependencias del Estado, pero un gobierno de ARENA no está preparado para gestionar la realidad nacional de forma coordinada. Cada ministerio o autónoma ha dispuesto, de manera independiente, de sus actividades y recursos.

Coordinar los esfuerzos de las diversas dependencias gubernamentales para incidir en los municipios seleccionados será una tarea titánica, que requerirá de una enorme voluntad política y, en último caso, de presión y también de control. Si la dirección del plan no tiene poder para imponerse sobre las tendencias hacia la dispersión, el esfuerzo se difuminará en una serie de acciones irrelevantes. Los altos funcionarios no solo deberán cambiar su mentalidad, sino que, además, necesitan un buen baño de extrema pobreza. Desconocen

qué es vivir en la miseria; tampoco están interesados en saberlo. Conviene, pues, exponerlos a la vida real de la mayoría para sensibilizarlos o, al menos, para crearles cierta conciencia de culpa.

El éxito del plan depende de la aceptación y colaboración de las comunidades beneficiadas y de sus líderes. Los gobiernos de ARENA han menospreciado la organización comunitaria y sus valores. Ahí donde no ha habido un impulso externo a la comunidad, ésta es inexistente. Los líderes locales suelen desconfiar de las intervenciones externas y más cuando éstas provienen de políticos o del gobierno. La gente no rechazará lo que le den, siempre lo agarrará, llevada por la necesidad, pero no se comprometerá con el plan con facilidad. La experiencia le ha enseñado que estas intervenciones son más propagandísticas que reales y de largo plazo.

Conviene, pues, que Casa Presidencial haga mucho menos énfasis en la propaganda y concentre sus esfuerzos en convencer a los liderazgos locales de las bondades de su oferta y más a los comunitarios y religiosos que a los políticos. La identificación y sobre todo la cooperación serán difíciles si el gobierno no piensa en términos del desarrollo local y de la descentralización de servicios y recursos. Una intervención concebida de forma puntual y de corto plazo no llegará muy lejos.

Aunque el plan pueda mejorar la situación socioeconómica de algunas familias en extrema pobreza, no deja de ser un paliativo para el devastador impacto de la política neoliberal de ARENA y la empresa privada. La idea no es ampliar los beneficios del modelo a estas familias, sino hacerles un poco más llevaderas sus consecuencias. Ninguna de las familias beneficiadas alcanzará su bienestar con este plan. A lo sumo, dejarán la extrema pobreza para entrar en la simple pobreza. Con todo, es un avance nada despreciable, sobre todo para quienes sobreviven en esos extremos de miseria y abandono. Y es que el plan se propone mejorar los índices del desarrollo humano, no redistribuir el ingreso. Es una forma inteligente de hacer eficaz el gasto social y un reconocimiento del papel subsidiario del Estado, en contra de un mercado concebido como norma absoluta de la vida social.

La contradicción fundamental es evidente. El gobierno actual reconoce que ARENA no ha logrado avanzar en la erradicación de la pobreza. Según el presidente Saca, por el poco crecimiento económico de más de una década, por la enorme

desigualdad en la redistribución del ingreso y por el contraste entre la ciudad y el campo. Corregir el rumbo supone replantear el modelo económico y no solo atender a las familias en extrema pobreza.

No hay que confundirse. No cabe esperar más de lo que el plan puede dar de sí, ni tampoco menos. No aumentará el crecimiento económico, tampoco redistribuirá el ingreso, pero sí contribuirá a cerrar la brecha entre la vida urbana y la rural. Lo social solo será tan importante como lo económico cuando haya redistribución del ingreso por la vía impositiva.

Para concluir, unas palabras más sobre la violencia registrada en la Semana Santa. La única culpable de esa violencia —vienen a concluir la mayoría de medios informativos— es la cultura, la mala educación y las malas costumbres de los salvadoreños, absolviendo así a las autoridades. Así se puede interpretar la línea editorial de *La Prensa Gráfica*, uno de los rotativos de mayor circulación en el país: “lo cierto es que sigue haciéndose presente el móvil destructivo, que se manifiesta de muchas maneras [...] Hay mezclados aspectos de educación, de valores sociales, de oportunidades para los jóvenes y de imperio generalizado y efectivo de la legalidad”, decía en su editorial del 29 de marzo. La conclusión del matutino es esta: “necesitamos sana práctica de valores”. Pero esta respuesta no satisface del todo.

Los números de la tragedia hablan por sí mismos, pero no lo dicen todo. Es importante, por ejemplo, establecer normativas severas que castiguen a los conductores irresponsables y, al mismo tiempo, buscar mecanismos que traten de inculcar una “cultura vial” lo suficientemente arraigada para que los conductores sepan como comportarse en las carreteras. Por el lado de las muertes causadas por armas de fuego hay un debate sobre las restricciones de su uso en manos de civiles, pero las fracciones de derecha en la Asamblea Legislativa aprobaron una mínima restricción que no contribuye en nada. El presidente de la República, por otro lado, se ha mostrado en contra del desarme de la sociedad. Simplemente, las recomendaciones de la sociedad civil fueron desoídas para atender intereses comerciales y ajenos al bienestar común.

Pero, más allá de eso, hay otros aspectos que subrayar, a propósito de lo anterior. La violencia en vacaciones no termina de entenderse, porque no termina de asumirse, como la violencia que cada día

abate a los salvadoreños. De acuerdo a cálculos hechos por una periodista de *El Faro*, durante la Semana Santa murieron, en promedio, 18 salvadoreños; pero a diario mueren casi diez desde finales del año pasado. Eso es lo cotidiano.

A parte de que los planes estatales de reducción de la violencia no han surtido el efecto esperado, la muerte violenta se ha convertido en parte de la cotidianeidad del salvadoreño y allí reside la primera cosa que hay que resaltar: el salvadoreño ha pasado del estupor ante la muerte violenta —que podría conducir a tomar cartas en el asunto— a la indiferencia. No significaron lo mismo los 9 muertos y 20 rehenes en un asalto ocurrido en Costa Rica que los 10 muertos diarios de El Salvador. Los costarricenses vieron —y vivieron— con estupor la tragedia que ocurría en un pequeño pueblo el pasado 9 de marzo. Las comparaciones son odiosas —reza un dicho popular—, pero ilustran lo que no se quiere ver.

La indiferencia va emparentada con la abulia, que el *Diccionario de la Lengua Española* define como la “falta de voluntad, o disminución notable de su energía”. Acá el dedo acusador apunta no solo al salvadoreño de a pie, sino al Estado —sobre todo las dependencias encargadas de resguardar la seguridad pública y fomentar la sana convivencia— que no ha sabido responder contundentemente a la situación de violencia social.

El editorial citado líneas arriba concluye que “nuestro sistema de vida ha sido, por tradición, excluyente y muy poco sensible a la práctica de valores fundamentales para la armonía y la paz social”. ¿Otra vez la culpable cultura? En efecto, hay muchos elementos culturales que cambiar, pero esos cambios son demorados, casi imperceptibles, hasta diluirse entre generaciones. La cultura de la violencia en El Salvador habría empezado a gestarse desde antaño, mucho antes del conflicto armado, la dictadura militar o la introducción del café a finales del siglo XIX... y todavía está entre los salvadoreños, aunque adornada con otros ropajes.

Para cambiar la situación de violencia no solo hay que culpar a la “cultura nacional”, que ni siquiera los salvadoreños saben a ciencia cierta qué es ni comparten un perfil común. Deben tomarse acciones coyunturales concretas, contundentes, pero racionales. En suma, una mezcla de lo estructural (la cultura) con lo coyuntural (planes estatales, reformas educativas y sociales).